

**ANÁLISIS RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO VIGENTES  
EN LA LEY 906 DE 2004, ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, EN  
LA CIUDAD DE PEREIRA PERIODO 2013-2014**

**JOHN HEYDER CASTRO MARTINEZ**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  
FACULTAD DE DERECHO  
ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA  
COHORTE XII  
PEREIRA  
2015**

**ANÁLISIS RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO VIGENTES  
EN LA LEY 906 DE 2004, ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, EN  
LA CIUDAD DE PEREIRA PERIODO 2013-2014**

**JOHN HEYDER CASTRO MARTINEZ**

**Mg. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA**

**Director de Posgrados**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA**

**COHORTE XII**

**PEREIRA**

**2015**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PROBLEMA DE INVESTIGACION .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Formulación del Problema .....</b>	<b>6</b>
<b>3.HIPOTESIS .....</b>	<b>7</b>
<b>4. JUSTIFICACION .....</b>	<b>8</b>
<b>5.OBJETIVOS .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 Objetivos Generales.....</b>	<b>10</b>
<b>5.2 Objetivos Específicos.....</b>	<b>10</b>
<b>6. MARCO REFERENCIAL .....</b>	<b>11</b>
<b>6.1 Estado de arte o Antecedentes investigativos.....</b>	<b>11</b>
<b>6.2 Marco Teórico.....</b>	<b>12</b>
<b>6.3 Marco Jurídico.....</b>	<b>16</b>
<b>7. DISEÑO METODOLOGICO .....</b>	<b>17</b>
<b>8. DESARROLLO TEMATICO.....</b>	<b>18</b>
<b>CAPITULO I: Las Medidas De Aseguramiento Dentro Del Sistema Penal</b>	
<b>Acusatorio .....</b>	<b>18</b>
<b>CAPITULO II: Medidas de aseguramiento que implican la privación de la libertad</b>	
<b>.....</b>	<b>37</b>
<b>CAPITULO III: Dificultades En La Solicitud De Medidas De Aseguramiento Ante</b>	
<b>El Juez De Control De Garantías.....</b>	<b>54</b>
<b>9. CONCLUSIONES .....</b>	<b>56</b>
<b>10. BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>58</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal colombiano, se erigen como las medidas cautelares dentro de cualquier proceso, buscando asegurar o conjurar la materialización del algún perjuicio. Pese a que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se consagraron diferentes medidas, la más utilizada es la privativa de la libertad, que se solicita por el Fiscal de conocimiento ante el Juez de Control de Garantías.

Ahora bien, el Artículo 307 del Código Penal, define como medidas de aseguramiento:

A. Privativas de la libertad

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;

B. No privativas de la libertad

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. ( Código de Procedimiento Penal Colombiano, Art.. 307).

De manera que el juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones

necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.

Ahora bien, conforme lo anterior, se hace necesario realizar un análisis de las medidas de aseguramiento vigentes en Colombia y la efectividad de las mismas, para analizar por qué se elevan solicitudes únicamente de aquellas que hacen alusión a la privación de la libertad.

## **2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

La petición inadecuada, inapropiada e inconducente de la Medida de Aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación puede ocasionar graves problemas de violación de derechos personales y procesales del detenido. De igual manera la falta de solicitud de Medida de Aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación puede a su vez traer varios problemas de seguridad pública y de violación de principios fundamentales y procesales.

De lo anterior se puede extractar el problema de investigación que se sintetiza en el siguiente interrogante:

### ***2.1 Problema de Investigación***

¿Cuál es la pertinencia y efectividad de las medidas de aseguramiento vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano a partir de la Ley 906 de 2004?

### **3. HIPOTESIS**

Será que los problemas en las solicitudes de medida de aseguramiento, por parte de la fiscalía General de la Nación en la ciudad de Pereira, Risaralda se asemejan a las situaciones nacidas a nivel nacional.

#### ***Hipótesis Afirmativa***

Hay diferencias en las medidas de aseguramiento vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano a partir de la Ley 906 de 2004.

#### ***Hipótesis Negativa***

No hay diferencias en las medidas de aseguramiento vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano a partir de la Ley 906 de 2004.

#### 4. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo parte de la importancia de determinar los criterios que tiene la Fiscalía General de La Nación Seccional Pereira, sobre los parámetros legales y Constitucionales en cuanto a la solicitud de Medida de Aseguramiento, así mismo, dar a conocer las implicaciones fácticas y jurídicas que conllevan una apreciación subjetiva de la medida en la Ciudad de Pereira, Risaralda.

El ministro de Justicia y del Derecho Reyes Alvarado y el fiscal general de la nación Montealegre (2014) radicaron ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca racionalizar el uso de la detención preventiva e impulsar el empleo adecuado de todas las medidas de aseguramiento como una forma de agilizar los procesos penales y garantizar los derechos de todos los colombianos.

De igual manera señalaron que:

“Hoy en día se entienden las medidas de aseguramiento como una especie de condena anticipada presumiendo que la persona es culpable; es una exageración que atenta contra las libertades del individuo”, señaló el Ministro Reyes. Y agregó que hay casos preocupantes como el de las personas que han estado privadas de la libertad por más de 10 años, sin que hayan sido hallados culpables o inocentes en el marco de un proceso penal.

“Se está exagerando en el uso de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. El Código de Procedimiento Penal consagra 11 formas distintas de medidas de aseguramiento y nosotros estamos usando solo las privativas de la libertad. La prueba de que no en todos los casos la medida preventiva de la libertad es necesaria son las 18.000 demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad, lo que



suman 23 billones en pretensiones”, explicó Reyes Alvarado. (Reyes Alvarado, 2014).

De igual forma se pronunció el Fiscal General quien aseguró que:

“la privación de la libertad debe ser la excepción. Advirtiéndole que: “Con mucha preocupación hemos visto cómo la detención preventiva, que debe ser una medida excepcional dentro del proceso penal, se ha convertido en la regla general. Lo que queremos con este proyecto que presentamos es volver a la filosofía inicial del Sistema Penal Acusatorio en el sentido en que la regla general es la libertad y que la detención preventiva es la excepción”. (Montealegre, 2014)

Lo anterior expuesto deja entrever que, la petición inadecuada, inapropiada e inconducente de la Medida de Aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación puede ocasionar graves problemas de violación de derechos personales y procesales del detenido. De igual manera la falta de solicitud de Medida de Aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación puede a su vez traer varios problemas de seguridad pública y de violación de principios fundamentales y procesales.

## **5. OBJETIVOS**

### ***5.1. Objetivo General***

Determinar las dificultades que se presentan en las solicitudes de medida de Aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Pereira, Risaralda para los periodos 2013 - 2014

### ***5.2. Objetivos Específicos***

Identificar las medidas de aseguramiento vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano a partir de la Ley 906 de 2004, destacar las que pueden solicitarse ante el juez de control de garantías.

Analizar qué medidas de aseguramiento que implican la privación de la libertad y cuáles no.

Describir las dificultades que se presentan en la solicitud de las medidas de aseguramiento ante el Juez de control de Garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación.

## 6. MARCO REFERENCIAL

### 6.1. Estado de Arte

Como antecedente investigativo encontramos la tesis titulada “*Medidas de Aseguramiento y Reforma Penal: Una Perspectiva de los Derechos Humanos*” por Plascencia Villanueva Raúl.

**Aspectos:** En esta tesis se habla de que para que la justicia penal pueda operar es preciso que existan las condiciones que permitan hacer efectiva la consecuencia jurídica atribuible al autor del delito, y para ello se requiere una providencia que haga factible dejar subsistente la materia de dicha consecuencia.

Artículo titulado “*Presunción de inocencia: Principio Constitucional Absoluto*”, por Juan Sebastian Tisnés Palacio (2012).

**Aspectos:** El artículo hace relevancia a la presunción de inocencia, erigida como principio constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, y ratificada por Sentencia C-774 de 2001 la cual señala que la presunción de inocencia no admite excepciones y debe permanecer incólume durante todo el proceso investigativo.

Artículo “*Privación de la libertad en el sistema penal acusatorio: carácter excepcional*”, por Jesús Ángel Bobadilla Moreno, 2006.

**Aspectos:** En este artículo se hace referencia a la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004 la cual fue adoptada por la constitución según la estructura del Acto Legislativo 03 de 2002, y la limitación de los derechos fundamentales.

## ***6.2. Marco Teórico***

### **PRIMERA VISION**

La valoración de los elementos probatorios así como la oportunidad para controvertir aquellos que sustenten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para imponer una medida de aseguramiento o para determinar que ésta puede revocarse o sustituirse, debe ser dinámica y cambiante en favor de la defensa de la garantía constitucional del imputado a tener acceso a su libertad, es decir, debe realizarse en el mismo momento en que se presentan las circunstancias o surgen los hechos.

### **SEGUNDA VISION.**

El juez de control de garantías está en la obligación constitucional de hacer un análisis racional ponderado y adecuado frente a la medida de aseguramiento, esto significa, que siempre tendrá que sopesar la necesidad de la medida frente a la afectación grave del derecho fundamental de la libertad del imputado, persona a quien eventualmente se le va a restringir parcial o totalmente dicho derecho. Observamos que esta nueva función de los jueces de garantías y de conocimiento, recae en nuestras

cabezas, por cuanto es el derecho penal la normatividad más invasiva de la libertad de las personas y, en este sentido, se justifica la mayor exigencia al momento de la argumentación para imponer o no las medidas a que hace alusión nuestra legislación penal.

### **TERCERA VISION**

Se debe considerar, además de los requisitos constitucionales ya antes enunciados y plasmados en artículo 308, lo observado en el 313 de la misma obra, pues de no cumplirse los condicionamientos constitucionales y los legales del 313, no sería posible la procedencia de la detención preventiva. El juez debe acoger todo lo relacionado con los dispositivos amplificadores del tipo o circunstancias que modifiquen los hitos punitivos a efecto de decidir sobre la procedencia o no de la medida de aseguramiento que corresponda.

### **ARTICULACION DE LOS ASPECTOS.**

El estudio detallado en cuanto a los requisitos legales y fácticos que debe tener en cuenta la Fiscalía General de la Nación, debe partir de los preceptos constitucionales de los cuales se deriva las normas sustanciales y procesales del derecho penal, por lo tanto la decisión de solicitarle la medida de aseguramiento al juez de control de garantías, no debe partir única y exclusivamente de lo mencionado en los artículos 2, 297, 308 y 313 del código de procedimiento penal y demás requisitos formales y sustanciales que el

ordenamiento impone, tanto el fiscal y el juez de control de garantías deben analizar elementos que no hacen parte del acervo probatorio pero que pueden ser de vital importancia no sólo en el proceso, sino en el entorno social, es decir, no se podría solicitar o dictar medida de aseguramiento a los posibles imputados que cumplan con los requisitos antes mencionados, sin entrar a analizar por ejemplo la situación actual de los establecimientos carcelarios del país, las riñas o delitos que se generan por el sobrecupo y los problemas de salubridad pública, los pabellones de seguridad etc.

La medida de aseguramiento es de naturaleza preventiva, con esto se busca salvaguardar los derechos de la sociedad o de la víctima, aplicando los principios de necesidad, de proporcionalidad, de razonabilidad entre otros, es por esto que no se debe confundir la medida de aseguramiento con la pena ya que la última cumple con una función sancionatoria y son otros aspectos los que se deben tener en cuenta para su aplicación.

Por otra parte se debe tener en cuenta que la libertad es un derecho de rango constitucional y principio rector del derecho penal ya que toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad, a no ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente o en casos de flagrancia como lo manifiesta la normatividad penal, es así que la excepción a dicha libertad sería la medida de aseguramiento, ahora bien, hay varias situaciones que se pueden desprender en virtud de la solicitud de la medida de aseguramiento, la primera de estas puede ser la aceptación de cargos por parte del imputado lo que le aseguraría una

condena, pero no necesariamente la medida de aseguramiento ya que la interpretación del juez de control de garantías sobre el asunto podría desprenderse de que el imputado al aceptar los cargos no cumple con todos los requisitos legales para que se le imponga la medida, además estaría colaborando con la justicia asumiendo sus responsabilidades penales sin desgastar el aparato judicial, además de esto con la aceptación se podría inferir que este posiblemente tenga el ánimo de indemnizar a la víctima de la conducta delictiva.

Ahora bien, el juez podría imponer una medida no privativa de la libertad como lo es la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido por el juez o otra autoridad judicial competente o la obligación de no salir del país entre otras.

La segunda puede ser la no aceptación de cargos por parte del imputado, pero de la inferencia razonable que adquiera el juez de control de garantías y del estudio de los requisitos legales dentro del código penal código de procedimiento penal el juez podrá decretar la medida de aseguramiento ya sea en un establecimiento carcelario o en el sitio residencial imputado, esto no quiere decir que la persona a ser condenada, bien podría demostrarse su inocencia en una posterior audiencia, específicamente en la audiencia el juicio oral.

Cabe mencionar que para proteger el derecho fundamental y constitucional de la libertad además de lo antes mencionado existen mecanismos jurídicos como lo son la

revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la revocatoria de la medida seguridad y la sustitución de la medida de aseguramiento.

Por lo tanto los jueces y fiscales no sólo deben someterse al imperio de la ley para tomar sus decisiones sino que deben hacer una sana crítica o interpretación de la situación real del caso, con esto no se busca que el fiscal o el juez actúen como legisladores, lo que se busca es darle fortaleza a la política criminal del Estado, confiando en la sabiduría y buena fe de los encargados de impartir justicia y partiendo siempre la presunción de inocencia de los imputados.

### ***6.3 Marco Jurídico***

Artículos 5, 7, 174, 175 y 176 del Código Penal, Artículos 2, 297, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, Artículos 2, 13, 29 y 30 de la Constitución Política de Colombia, Sentencia C-456/06 Sentencia, C-318/08 Corte Constitucional.



## **7. DISEÑO METODOLÓGICO**

### ***7.1. Tipo De Investigación***

Descriptivo

### ***7.2. Método de Investigación***

Deductivo

### ***7.3. Información Secundaria.***

Declaración Universal de Los derechos Humanos, Jurisprudencia de La Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, Constitución Política de Colombia, Código Penal y Código de Procedimiento Penal de Procedimiento Penal .

## **8. DESARROLLO TEMATICO**

### **CAPITULO I: LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO**

Las medidas de aseguramiento dentro del sistema Penal Acusatorio adoptado mediante la Ley 906 de 2004, se establecieron en el artículo 307 bajo las siguientes premisas.

Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:

#### **A. Privativas de la libertad**

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;

#### **B. No privativos de la libertad**

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.” (Negrilla y subraya fuera de texto)

Emerge de la disposición transliterada que no solamente la detención preventiva es la única medida de aseguramiento que puede ser deprecada en el trámite de un proceso penal.

Ahora bien, su aplicación se regula en el artículo 308, imponiendo la obligación al juez de control de garantías de verificar los supuestos para la procedencia de cualquiera de ellas. Indica la mencionada disposición normativa:

Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Sobre la aplicación de las medidas de aseguramiento, la Corte Constitucional ha efectuado diferentes pronunciamientos en los que ha analizado el alcance de las disposiciones antes mencionadas, pues de alguna forma se entendía que a quien le era aplicada una medida privativa de la libertad, se le menguaba su derecho a presumirse inocente, para lo cual la Colegiatura realizó el siguiente discurrimento:

El Acto Legislativo 03 de 2002 reformó los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución, elevó a rango constitucional la estructura básica del sistema penal colombiano e introdujo importantes reformas al sistema de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal. Para los efectos del presente asunto, merece especial mención la función que cumple el Juez de control de garantías en materia de reserva judicial de la libertad, así como el establecimiento expreso de límites constitucionales a la posibilidad de que se decreten medidas restrictivas de la libertad.

El artículo 2º del mencionado Acto Legislativo, modificó el artículo 250 de la Constitución Política, constitucionalizando las medidas de aseguramiento las cuales han sido objeto de estudio y pronunciamiento por esta Corte Constitucional.[10] Se ha afirmado respecto de ellas, que hacen parte de las denominadas medidas cautelares, mediante las cuales la autoridad judicial competente dispone sobre las personas o sus bienes con el fin de asegurar la comparecencia del imputado al

proceso penal, conservar la prueba y proteger a la comunidad, en especial a las víctimas.

La sentencia C-634 de 2000 señaló lo siguiente:

“[L]as medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin...”

La sentencia C-774 de 2001[12] también se pronunció sobre el tema:

“Las medidas de aseguramiento hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión judicial.

**Para las medidas de aseguramiento, que en la ley 600 de 2000 estaba constituida únicamente por la detención preventiva, la Ley 906 de 2004, consagró algunas de las medidas como privativas de la libertad y otras no privativas de la misma, las cuales innegablemente en ambos casos comportan una restricción a la libertad personal, cuya finalidad por expresa disposición del artículo 296 es la siguiente:**

“ ...

En el nuevo sistema, las medidas de aseguramiento que inciden en los derechos de las personas han de ser ordenadas por el juez de control de garantías, no

por el fiscal. Los fines o requisitos que justifican tales medidas, son precisados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004...”

“...

En términos generales, las medidas cautelares buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso así como asegurar la conservación de la prueba, mantener el estado de cosas como al inicio del trámite y proteger a las víctimas y a la comunidad. Sobre las finalidades que justifican la imposición de las medidas de aseguramiento que afectan la libertad personal también se pronunció la sentencia C-774 de 2001:

“[S]e tiene, entonces que la propia Constitución, el artículo 250 citado, establece una de las finalidades admisibles para la detención preventiva, cual es la de asegurar la comparencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal. Sin embargo esta norma no agota al ámbito de indeterminación del concepto, cuya alcance corresponderá fijar, dentro de los límites constitucionales, al legislador y a la jurisprudencia. Sobre este particular la Corte ha dicho que “...Dentro de las funciones que se le atribuyen a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de "Asegurar la comparencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento".... El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción.

Como se ve, esta Corporación, aún dentro del ámbito del propio artículo 250 ha encontrado para la detención preventiva finalidades que desbordan el tenor literal previsto en esa disposición.

Para la completa determinación del concepto de detención preventiva, reitera la Corte, la Constitución ha dejado un espacio a la potestad de configuración del legislador, la cual sin embargo, no está exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que respete tanto la naturaleza cautelar de la figura como los principios y derechos constitucionales.

La propia Carta contiene elementos que sin excluir otros que puedan resultar constitucionalmente admisibles, pueden configurar finalidades válidas para la detención preventiva. Así, por ejemplo, puede considerarse que la Constitución prevé, de manera implícita, como fin u objetivo de la detención preventiva, la necesidad de afianzar la preservación de la prueba, tal como se deduce del numeral 4º del artículo 250 de la Constitución, por virtud del cual, es función de la Fiscalía “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”. Sí a dicha entidad le corresponde velar por la seguridad de los testigos y de sus testimonios, modalidad de prueba reconocida por los ordenamientos procesales, es susceptible y admisible que para cumplir tal objetivo decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes, circunstancia que bajo una interpretación sistemática no restringe su alcance a otros medios de prueba que puedan resultar en un serio y fundado peligro (*fumus boni juris*), y que requieran como única medida de protección la detención, ya que en ausencia de estas circunstancias, y en aras de proteger la dignidad humana (art 1º de la Constitución) y el derecho a la libertad personal (art 2º. y 28 de la Constitución), es predicable la adopción de otro tipo de



medidas menos lesivas de estos derechos fundamentales como disponer la vigilancia de las personas, o la incautación de documentos, entre otras (artículo 256 del decreto 2700 de 1991). Condicionamiento que hace efectivo el postulado constitucional de la investigación integral, por el cual, es obligación de la Fiscalía General de la Nación investigar no sólo lo desfavorable al acusado sino también lo favorable.

Igualmente, la protección de la comunidad en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo 1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado en “la prevalencia del interés general”, cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin esencial del Estado, “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad, no obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como desfavorable al acusado.

Por lo tanto, los criterios legales de procedencia y de señalamiento de los fines de la detención preventiva, deben concurrir con los mandatos constitucionales, y podrían ser objeto de juicio de constitucionalidad cuando no se ajusten a los postulados de la Carta fundamental.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de ciertas exigencias con el fin de asegurar su legalidad.

Así, el artículo 313 de la Ley 906[19], establece que procede la detención preventiva en establecimiento de reclusión, siempre que se verifique que el delito es de aquellos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, o cuando el mínimo de la pena prevista sea de 4 años o más de prisión o en los delitos contemplados en el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase de los ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales.

En lo que respecta a las exigencias de tipo fáctico establecidas en el artículo 308 de la ley 904, relacionadas con la información o los elementos materiales probatorios o la evidencia física encontrada, así como en relación con las exigencias jurídicas o legales del artículo 313 para que el juez de control de garantías decreta la medida de aseguramiento, esta Corporación se pronunció en las sentencias C-774 de 2001 y C- 805 de 2002, cuyas consideraciones se aplican al nuevo sistema acusatorio así:

“...

Ahora bien, como la medida de aseguramiento comprende la afectación de derechos fundamentales es necesario, para garantizar los derechos del imputado, que la misma sea sometida a una autorización judicial que debe verificar, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando dicha medida puede

comprometer la libertad del procesado. En torno a la necesidad de la medida de aseguramiento como una restricción al derecho a la libertad individual del procesado, también la Corte Constitucional se ha pronunciado en varios de sus fallos.

“ ...

El legislador también puede indicar diversos criterios para apreciar dicha proporcionalidad, entre los que se encuentran la situación del procesado, las características del interés a proteger y la gravedad de la conducta punible investigada. En todo caso, la Constitución exige que se introduzcan criterios de necesidad y proporcionalidad, al momento de definir los presupuestos de la detención preventiva.

Además de estos dos elementos, hay un tercero: el criterio de convicción acerca de la probabilidad de que el procesado sea el autor de la conducta punible investigada.”  
(...)

Como ya se indicó, el juez de control de garantías es el competente para pronunciarse sobre la solicitud de la medida de aseguramiento como lo establece el artículo 250 de la Constitución. Sobre el particular la sentencia C-591 de 2005[25] señaló que una de las funciones del juez de control de garantías es decidir sobre la solicitud de aplicación de la medida de aseguramiento:

**“[U]na de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el juez de control de garantías examinará**

si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental ( i ) es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.”

De otra parte es pertinente precisar también que las medidas de aseguramiento no equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue, esto es, para asegurar la comparencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la víctima.”<sup>1</sup> (Negrilla y subraya fuera de texto)

Así las cosas, las medidas de aseguramiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano se pueden asimilar a las medidas cautelares, que buscan prevenir o proteger de cierta manera otros bienes jurídicos, sin que ello implique, *prima facie*, la culpabilidad de su destinatario.

Ahora, debe aclararse que la detención preventiva no puede ser confundida con las penas que ya son impuestas a través de la sentencia, pues si bien en ambas se afecta el derecho fundamental a la libertad, su disyuntiva emerge en la causa que las origina y que se puede extractar de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Carta Política.

<sup>1</sup> CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-456 de 2006. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.

Corolario de lo anterior, las detenciones preventivas ordenadas por el juez de control de garantías, son apenas unas medidas cautelares que se aplican no sólo cuando se dan los supuestos descritos en los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Penal, sino que debe analizarse el artículo 28 de la Constitución. En otras palabras la detención preventiva no es una pena, pues la pena es la convicción de la existencia de responsabilidad penal, que surge al haberse surgido el juicio con la totalidad de las garantías procesales que integran el derecho al debido proceso. (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-327 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz).

Las medidas de aseguramiento también deben revestir una formalidad que propende por la protección de los derechos del sindicado. Por ello se ha precisado que es el juez de control de garantías el encargado de imponerla, previa petición de la Fiscalía General de la Nación, quien en gran medida soporta su petición sobre la medida privativa de la libertad, así:

“La institución de la detención preventiva se inserta dentro de la concepción de la libertad personal como elemento básico y estructural del estado de derecho, que sin embargo no reviste un carácter absoluto e ilimitado, dada la necesidad de armonización de los derechos fundamentales, entre sí, y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta.

(...)El Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación, empero, los casos en que tal limitación tenga lugar han de

venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal...”.

Por tratarse de una restricción a la libertad personal, la detención preventiva debe estar precedida de los fundamentos jurídicos que conforme al artículo 28 de la Constitución la autorizan de manera excepcional al disponer que : " Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurren tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.

En desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de estrictas exigencias fundamentales que estructuran su legalidad, a saber: (i) deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso al cual acceden o accederán; (ii) con carácter eminentemente provisional o temporal; y (iii) bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben estar fundamentadas en alguna de las finalidades constitucionalmente admisibles para su imposición[13].

Se trata de una medida de naturaleza preventiva o cautelar y por ende provisional, que cumple unas finalidades específicas. Al respecto ha señalado la jurisprudencia:

“...Las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de

cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin...”.

La naturaleza cautelar de la detención preventiva está relacionada con su carácter meramente instrumental o procesal – no punitivo – que impone su ineludible fundamentación, en cada caso concreto, en alguna de las finalidades mediante las cuales se provee a su justificación.

La vinculación a fines de la decisión de imponer una medida de aseguramiento. El criterio de necesidad en su aplicación

El artículo 250 numeral 1° de la Constitución destaca el criterio de necesidad como guía que debe orientar la imposición de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su vez vinculado a las tres finalidades allí establecidas: (i) asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; (ii) la conservación de la prueba; y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.

El carácter exceptivo, y la vinculación a fines de la detención preventiva (necesidad), encuentra así mismo fundamento en el artículo 9° del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, que establece: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. (Se destaca).

El artículo 250.1 es desarrollado por el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, norma que al establecer los presupuestos para decretar una medida de aseguramiento, además de los relativos a las exigencias probatorias sobre una probable participación del imputado en la conducta delictiva que se investiga, condiciona su imposición a la concurrencia de cualquiera de los siguientes requisitos:

- “1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.

Son éstas las únicas finalidades admisibles, que de acuerdo con el orden jurídico, pueden llevar a una privación de la libertad como medida cautelar.



La concepción de la detención preventiva vinculada a fines, parte de los principio de afirmación de la libertad y de la interpretación restrictiva de las normas que autorizan su limitación. Su carácter instrumental, impone al aplicador incorporar valoraciones que atiendan criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad en la decisión que restringe la libertad con fines meramente precautelativos (Art. 295 C.P.P.). De tal manera que ninguna medida de aseguramiento se puede producir al margen de una valoración sobre su necesidad, establecida a partir de alguno de los fines que constitucionalmente le son adscritos.

La exigencia de justificación de una medida de aseguramiento con base en cualquiera de las finalidades constitucionalmente admisibles, se convierte así mismo en un mecanismo de salvaguarda del principio de presunción de inocencia, del cual se deriva la proscripción de toda prolongación injustificada de una detención preventiva, de tal manera que se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena. Así lo señaló la Corte al declarar que: “Los artículos 29 de la Constitución y 9° del pacto internacional de derechos civiles y políticos impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así desvirtuaría el carácter eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría por convertirse en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia.”

Si bien la Corte ha declarado la compatibilidad de la detención preventiva con el principio de presunción de inocencia, ha destacado también la necesidad de su justificación en fines y razones que sean constitucionalmente admisibles. Al respecto ha indicado que : “[P]ara que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”<sup>2</sup>.

De lo discurrido se puede colegir que existen varias medidas de aseguramiento, pero la más aplicada es la reclusión en establecimiento carcelario, pues al fin de cuentas, es la más lesiva de la libertad y de la presunción de inocencia, y por tanto, la que merece particular tratamiento; aplicable indistintamente a cualquiera de las denominaciones con que son conocidas a nivel internacional o histórico: prisión preventiva, encarcelamiento preventivo, detención preventiva, detención provisional, arresto provisional, prisión provisional, reclusión preventiva o custodia preventiva; asimismo, se entenderán, en línea con la definición de Carrara, como el encarcelamiento de un ciudadano por la sola sospecha de su culpabilidad antes de ser convicto y condenado.

Para imponer medidas de aseguramiento, es obligatorio que ésta tenga sustento en alguno de los siguientes requisitos: i) que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, ii) que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o la

---

<sup>2</sup> CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-318 de 2008.

víctima o, iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia.

“Pero antes de cumplirse uno de esos tres requisitos exigidos por la ley, es necesario que el operador jurídico que impone la privación de la libertad, Juez de Control de Garantías en el caso colombiano, infiera que el imputado es autor o partícipe del delito que se le endilga. Evidentemente este análisis siempre es desfavorable para el imputado, pues de no existir inferencia en su contra, la Fiscalía no lo imputaría, es más, el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal usa la misma fórmula para referir las situaciones que determinan la formulación de imputación: cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva investigada.

Así las cosas, la inferencia razonable siempre existirá, pues la exigencia que se hace a la Fiscalía para imputar, es la misma que debe hacer el Juez para imponer la medida de aseguramiento (inferencia razonable de autoría o participación), máxime cuando la imposición de la medida se realiza en audiencias concentradas justo después de la formulación de imputación, de modo que siempre existirá, formalmente, motivo para la imposición de la medida. Evidentemente la formulación de imputación no apareja automáticamente la medida de aseguramiento, sólo se quiere hacer hincapié en que el insumo para imponerla ya viene desde que se imputan los cargos.

Además de lo anterior, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal indica que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario procederá, entre otros, en los delitos que tengan prevista

pena de más de cuatro años cuando sean investigables de oficio, es decir, casi todos, pues nuestro legislador, en una muestra de miopía en política criminal, ha venido aumentando considerablemente las penas buscando que en todas las oportunidades proceda el encarcelamiento preventivo u obligando a la imposición de éstas.

Finalmente, enmarcados en un título denominado régimen de la libertad y su restricción, el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal refiere el carácter excepcional de la restricción de la libertad y que ésta debe ser adecuada, proporcional, razonable y necesaria frente a los contenidos constitucionales; y el 296, en concordancia con lo prescrito en el artículo 308 enseña que la libertad personal podrá ser afectada cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad o la víctima o el cumplimiento de la pena”. (Tinés, 2011:22).

## CAPITULO II: MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE IMPLICAN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

Conforme lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, las medidas de aseguramiento se clasifican así:

<b>PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD</b>	<b>NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD</b>
Detención preventiva en establecimiento de reclusión.	1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento	2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.
	3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.
	4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

	5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
	6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
	7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
	8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
	9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Como se dijo en precedencia la aplicación de las medidas de aseguramiento están en cabeza del juez de control de garantías quien es el encargado de velar porque no se vulneren los derechos del sindicado.

Una de las modificaciones que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria, fue la creación del juez de control de garantías, a quien se le asignaron competencias “para adelantar (i) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; e (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución”[86].

Tal como lo ha resaltado esta Corporación, al juez de control de garantías le corresponde examinar “si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i ) si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si la medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.”[87]

Teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento comprende la afectación de derechos fundamentales, el papel que le corresponde cumplir al Juez de Control de Garantías dentro de tal audiencia encuentra sustento en el artículo 250 Núm. 1 constitucional y está íntimamente ligado con la verificación, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando dicha medida puede comprometer la libertad del procesado.[88] Es el juez de control de garantías el competente para pronunciarse sobre las condiciones fácticas y jurídicas que sustentan la solicitud del Fiscal, y determinar si tal solicitud resulta razonable, adecuada, necesaria y proporcional y en caso de que así sea, autorizar la medida de aseguramiento como lo establece el artículo 250 de la Constitución. Así lo subrayó la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005[89] al referirse a las funciones que debe cumplir el Juez de Control de Garantías, al respecto expresó:

“Una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el juez de control de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, si la medida de intervención



en el ejercicio del derecho fundamental (i) es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; (ii) si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y (iii) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.” (Resaltado agregado al texto)

En relación con el carácter de adversarial del proceso penal, la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, para buscar la aplicación de una justicia material,[90] y sobre todo, para ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.” (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-293 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.).

Preciso es traer a colación lo dicho por la Fiscalía General de la Nación sobre las medidas de aseguramiento, en donde se evidencia que hace alusión solo a la medida privativa de la libertad, sin que efectúe un análisis de las medidas de aseguramiento:

Definida, como está, la libertad, no es entonces un derecho absoluto, por lo cual admite restricciones, como la detención preventiva, respecto de la cual se ha dicho que:

“... consiste en la privación de la libertad ordenada antes de la existencia de la sentencia en firme, por el tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la realización del juicio oral, o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad...”

La prisión preventiva, ha sostenido la Doctrina, es una de las instituciones procesales que evidencian claramente el régimen político existente en una nación, pues los regímenes políticos autoritarios se caracterizan por una extensión desmedida de la posibilidad del dictado de la prisión preventiva, en tanto que en los regímenes democráticos, en donde se aplica un sistema procesal con rasgos acusatorios, se imponen, por el respeto a los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad en la intervención del Estado, unas exigencias mayores, definidas en la ley como requisitos objetivos y subjetivos para la imposición de la prisión preventiva.

Lo que la doctrina internacional ha dado en llamar “prisión preventiva”, en el ordenamiento jurídico colombiano se denomina “medidas de aseguramiento”. Hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte impone la autoridad judicial sobre bienes o personas, con el fin de asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad.

“... ”

Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Fiscalía<sup>55</sup> define la medida de aseguramiento como:

“... la limitación material o jurídica de la libertad de una persona y de algunos derechos como el patrimonio económico (si se le impone una caución real), la locomoción (si se le imponen presentaciones periódicas o un dispositivo electrónico), cuando se infiera razonablemente que es autor o partícipe de la conducta punible investigada y por la cual se le ha formulado imputación. Ellas pueden ser entonces privativas o no privativas de la libertad, según la clasificación que trae el Código de Procedimiento Penal en su artículo 307”.

De acuerdo con la nueva sistemática procesal penal definida en la ley 906 de 2004, articulada con las nuevas disposiciones constitucionales 1 Sistema Acusatorio, a la Fiscalía solo le corresponde adoptar una determinación sobre la concesión de libertad en casos en que no se cumplan los requisitos objetivos para decretar la detención preventiva o para decretar por parte del fiscal que la captura en flagrancia fue ilegal. En los demás casos, le corresponde al fiscal acudir ante el juez de garantías, dejándole a disposición el aprehendido, para que sea el juez quien resuelva sobre la legalidad del procedimiento de captura y sobre las demás peticiones que le presenten las partes, incluyendo la de la posible imposición de una medida de aseguramiento.” (Vanegas, 2007:69).

Vale la pena traer a colación, el pronunciamiento que sobre el tema de las medidas de aseguramiento ha efectuado la Corte Suprema de Justicia, quien además hizo un

recuento de las medidas que se consagraban con antelación a la expedición de la Ley 906 de 2004.

En esa oportunidad dijo la Colegiatura:

El numeral 1° del artículo 354 del la Ley 600 de 2000<sup>3</sup> prescribe que la situación jurídica debe ser definida en aquellos delitos respecto de los cuales está prevista la detención preventiva, esto es, cuando se procede por delitos que tengan pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro años, o respecto de alguno de los ilícitos enunciados en el numeral 2° del artículo 357, o cuando sobre el sindicado pese sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional sancionado con prisión y en los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces especializados.

Atendiendo los hechos expuestos en la denuncia en concordancia con las pruebas aportadas, dos son las conductas delictivas por las cuales se vinculó a *SILFREDO MORALES ALTAMAR*: celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales<sup>4</sup> y peculado por apropiación<sup>5</sup>.

Conforme el artículo 410 del Código Penal, el ilícito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está sancionado con pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.

El artículo 397 del mismo estatuto, sanciona el peculado por apropiación, cuando no supera el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como aquí ocurre, con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.

---

<sup>3</sup> Normatividad que rige los procesos adelantados contra los miembros del congreso, según lo establece el artículo 533 de la Ley 906 de agosto 31 de 2004.

<sup>4</sup> Artículo 410 de la Ley 599 de 2000

<sup>5</sup> Art. 397 de la Ley 599 de 2000

De conformidad con los artículos 354 y 357-1 de la Ley 600 de 2000 en estos casos debe emitirse pronunciamiento en torno a la situación jurídica del implicado a efecto de establecer si se cumplen los requisitos formales y sustanciales que demanda la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En el mismo sentido la Ley 906 de 2004, consagra en el artículo 313-2 que la detención preventiva procede para delitos cuya pena sea o exceda de cuatro años de prisión.

Sin embargo, su artículo 315 determinaba que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad se aplicarían, entre otros, a los delitos cuyo mínimo de pena señalada en la ley no excediera de cuatro años.

El estudio de los artículos 313-2 y 315 de la Ley 906 de 2004, llevó a la Sala a advertir el contrasentido entre las dos disposiciones, pues mientras en la primera, las medidas privativas de la libertad proceden, entre otros eventos, frente a delitos cuya pena *sea o exceda de 4 años* de prisión, en la segunda señalaba que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad se aplicaban a delitos cuyo mínimo de la pena *“no exceda de cuatro (4) años...”*.

Esta divergencia llevó a la Sala a concluir que en la interrelación de estas normas, alusivas ambas a una pena mínima de cuatro años como derrotero para imponer, en un caso, privación de la libertad<sup>6</sup> y, en otro, medida de aseguramiento no privativa de tal derecho<sup>7</sup>, prevalecía lo dispuesto en la segunda de ellas porque, a diferencia de la primera, ésta conlleva una menor limitación y restricción a un derecho fundamental permitiendo imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad en delitos sancionados con una pena cuyo mínimo es de 4 años, circunstancia por la cual se coligió que la detención preventiva, en el evento del artículo 313 numeral 2° de la Ley 906 de 2004 sólo procede para cuando el delito tiene una pena mínima que *excede* de 4 años de prisión<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Artículo 333 numeral 2

<sup>7</sup> Artículo 315

<sup>8</sup> Segunda Instancias, radicado 24152 del 20 de octubre de 2005; Únicas instancias: rad. 9842, auto del 19 de enero de 2006; rad. 19528, auto del 20 de junio de 2007; rad. 22019, auto del 12 de marzo de 2008; rad. 26708, auto del 9 de junio de 2008, entre otros.

La aplicación de esta conclusión a los asuntos tramitados bajo los postulados de la Ley 600 de 2000 condujo a predicar la improcedencia de resolver situación jurídica en los eventos en que la pena mínima del ilícito por el cual se procede no supere los cuatro años de prisión.

Sobre el particular la Corporación advirtió

*“el carácter benéfico de la norma debe ir más allá del examen destinado a establecer la procedencia de la medida de aseguramiento o la revocatoria de la que se hubiere impuesto por virtud de los artículos 354-1, 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, para analizar directamente si resulta procedente resolver o no situación jurídica, ya que en ese específico acto procesal es cuando el funcionario decide si impone la medida cautelar.*

*En ese orden de ideas, si de conformidad con el artículo 354-1 de la Ley 600 de 2000 la situación jurídica debe definirse en los eventos en que sea procedente la detención preventiva, cuando dicha medida no puede imponerse como en este caso por efecto de la aplicación favorable de una norma posterior, tampoco resulta procedente resolver situación jurídica pues esta determinación está atada o depende de la viabilidad de la detención, de manera que lo procedente en el más puro criterio de favorabilidad es abstenerse de emitir la decisión referida”.*(Auto de 20 junio de 2007 Radicado 19528).

En punto a las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, también se indicó que era imposible imponer alguna de las señaladas en el literal B del artículo 307, como quiera que no existían para el momento de la comisión del supuesto hecho delictivo.(Auto del 20 de octubre de 2005. Radicado 24152).

En vigencia de esta postura, el 28 de junio de 2007 entró a regir la Ley 1142, en virtud de la cual se superó la inconsistencia surgida entre los artículos 313 numeral 2º y 315 de la Ley 906 de 2004, al precisarse en el artículo 28 modificatorio del 315 *idem* que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad sólo proceden cuando el delito investigado tiene una pena mínima inferior a cuatro (4) años prisión.

En la exposición de motivos de la Ley 1142 se dijo en torno a dicha modificación:

*“Con la reforma del artículo 315 se resuelve la antinomia advertida entre los actuales artículos 313 y 315, cuando se trata de delitos cuya pena mínima sea exactamente de cuatro (4) años. Lo anterior, porque la política criminal evidenciada por el legislador ha sido la de adjudicar detención preventiva a los delitos cuya pena mínima sea o exceda de cuatro (4) años, como lo previó la norma”*

Esta nueva situación lleva necesariamente a la Sala a reexaminar el punto y a replantear su tesis. En efecto, una lectura de la Leyes 600 de 2000<sup>9</sup>, 906 de 2004<sup>10</sup> y 1142 de 2007<sup>11</sup> modificatoria del tópico referido, permite inferir sin duda alguna, que la posición del legislador frente a este tipo de conductas ha sido la de restringir provisionalmente la libertad, cuando se advierte el compromiso penal del implicado. Acorde con el sistema procesal, dicha decisión se adopta a través de audiencia pública en los términos de la Ley 906 de

---

<sup>9</sup> Artículos 354 y 357.

<sup>10</sup> Artículo 313 y 315

<sup>11</sup> Artículo 27

2004, o mediante la definición de situación jurídica conforme la Ley 600 de 2000.

En ambos casos, además, puede suceder que la privación de la libertad no se lleve a cabo ante la falta de uno de los presupuestos que, por separado, cada uno de los procedimientos procesales exige.

En el caso preciso de la Ley 600 de 2000, reguladora de la presente investigación en virtud del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, puede claramente observarse que no en todos los casos donde existe la obligación de resolver situación jurídica se impone necesariamente la medida de aseguramiento de detención preventiva; el veredicto final, siempre está supeditado al análisis de las pruebas y a los fines que aquélla persigue, presentándose así alguno de los siguientes eventos:

- Que existan dos indicios graves de responsabilidad que comprometan al sindicado –art. 356, inciso 2º-, y se configure alguno de los fines, caso en el cual se impone la medida de aseguramiento de detención preventiva.
- Que obren dos indicios graves de responsabilidad y no se advierta la presencia de fin alguno, circunstancia que conlleva a no imponerla.



➤ Que no se adviertan los dos indicios exigidos por el legislador, caso en el cual por sustracción de materia no se examinan sus fines ni se impone medida de aseguramiento de detención preventiva.

Obsérvese cómo en las dos últimas hipótesis, a pesar de no imponerse la medida de aseguramiento, el funcionario judicial indistintamente se encuentra obligado a definir la situación jurídica del sindicado.

Situación similar se presenta en el marco de la Ley 906 de 2004, cuando ante la solicitud de restricción de la libertad formulada por el fiscal, el juez de control de garantías adopta una decisión adversa, fundamentado en la ausencia de los requisitos allí establecidos, circunstancia que lo conduce a declarar su improcedencia.

Ante estas posibilidades jurídicas, pierde vigencia la tesis inicialmente prolijada por la Sala, según la cual “*cuando dicha medida no puede imponerse ..., tampoco resulta procedente resolver situación jurídica*”, habida cuenta que su definición no está supeditada, como se ha visto, a la restricción de la libertad, surgiendo así la obligación de resolverla.

De otra parte, ha de recordarse que la jurisprudencia de la Sala -referida a la aplicación favorable de normas de la Ley 906 de 2004 a procesos tramitados por la Ley 600 de 2000- ha precisado reiteradamente que tal reconocimiento está

condicionado básicamente al cumplimiento de tres requisitos, a saber: i) que la figura a aplicar esté regulada en ambas legislaciones, sin requerirse para el efecto que lo sea bajo el mismo *nomen iuris*, como que basta una identidad sustancial en torno al fenómeno jurídico inmerso en ambas normatividades. ii) que la aplicación de la norma favorable se haga sobre la base de la existencia de similitud de presupuestos fácticos o procesales. Y iii) que para hacerse efectiva la garantía no se desvertebre o resquebraje el sistema que debe gobernar la respectiva actuación, vale decir que -entre otras cosas- no se omita algún paso del esquema procesal. O dicho de otro modo, que se aplique la favorabilidad en lo estrictamente necesario. Respecto del tema obsérvese el siguiente pronunciamiento de la Sala:

*“Pero si se quiere ahondar en mayores razones téngase en cuenta que al haberse invocado la aplicación de la postrer legislación bajo la teleología de la favorabilidad para ello –conforme lo ha señalado esta Sala en el último año- además, desde luego, de la sucesión de leyes en el tiempo más el tránsito o la coexistencia de legislaciones, deben cumplirse básicamente tres condiciones: i) que las figuras jurídicas enfrentadas tengan regulación en las dos legislaciones, ii) que respecto de aquellas se prediquen similares presupuestos fáctico-procesales- y iii) que con la aplicación favorable de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se le da cabida al instituto favorable”<sup>12</sup>*

Pero hay algo más: conforme lo enunciado atrás, la no definición de situación jurídica puede comportar limitación al derecho de defensa, en la medida en que estando obligado el instructor a cumplir con tal carga (cfr. arts.

---

<sup>12</sup> Sentencia del 9 de febrero de 2006, radicados 23700. En el mismo sentido radicados 25300 del 23 de mayo de 2006 y 26831 del 15 de mayo de 2008.

354, 357-1 Ley 600 de 2000) en la respectiva providencia deberá consignar la valoración de los distintos medios de prueba aportados, especialmente los de descargo, bien para admitirlos, ora para desecharlos, pudiendo así el inculcado o su defensor -en el último evento- redireccionar el ejercicio de la defensa. De omitir el fiscal ese paso procesal -conforme lo autorizaba la jurisprudencia en el pasado- es claro que el procesado no podrá conocer cuál es el grado de credibilidad que al operador judicial le ofrecen las pruebas en que aspira aquél sustentar su defensa.

No hay duda, así, que de omitirse ese paso del esquema procesal no sólo se desvertebra el sistema a seguir (para el caso, el procedimiento de la ley 600 de 2000), que impone la obligación de resolver situación jurídica, sino que también se limita por esa vía el derecho de defensa y por contera se desobedece el mandato 29 superior que impone el respeto a las formas propias de cada juicio, siendo “*forma propia*” la definición de situación jurídica.

## 1.2. De la medida de aseguramiento aplicable.

Siguiendo estos lineamientos, se observa igualmente que ninguna de las leyes procesales anteriormente citadas excluye la medida de aseguramiento para delitos cuya pena sea o exceda de cuatro años, como sería para el caso aquí tratado, así: en la Ley 600 de 2000 (art. 357-1), detención preventiva; en el texto original de la Ley 906 de 2004 (artículos 313-2 y 315), medida no privativa de la

libertad; y en la Ley 1142 de 2007, privativa de la libertad. Todo lo cual significa que en ningún momento un delito con la pena mínima antes señalada ha quedado desprovista de una medida de aseguramiento.

Siendo así, no tiene cabida aducir con sustento en el principio de favorabilidad la imposibilidad de imponer alguna de tales medidas, cuando se advierte, merced al tránsito de leyes acaecido –*Leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y 1142 de 2007*–, que el legislador nunca ha dejado sin represión provisional conductas con penas como las aludidas; por el contrario, las ha tratado con mayor rigor.

En tales condiciones, la deducción correcta para estos eventos, dada la coexistencia de leyes reguladoras de la misma temática, no es otra que escoger de entre ellas la más favorable, vale decir, la Ley 906 de 2004 que prevé medidas de aseguramiento no privativas de la libertad –*literal B del artículo 307*–

Esta postura atiende la exposición de motivos del proyecto que culminó con la expedición de la aludida Ley:

*“En punto a las atribuciones que se otorgan a los jueces de control de garantías para disponer medidas de aseguramiento, el proyecto estatuye la detención preventiva sólo como una de sus especies, dando cabida a otra gama de medidas que no obstante, implicar una limitación al derecho fundamental de la libertad resultan menos drásticas que la reclusión en un establecimiento carcelario.”*

Resta señalar que si bien el texto original de la Ley 906 de 2004 no estaba vigente cuando acaecieron los hechos investigados, como tampoco lo está en este momento procesal, por causa de la reforma introducida por la Ley 1142, su aplicación procede, de manera retroactiva (*desde el punto de vista de la fecha de comisión de los ilícitos*) en atención a lo normado en el artículo 29 de la Constitución Política, inciso 2º del artículo 6º de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, consagratorios del principio de favorabilidad y artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que regula la aplicación de las leyes procesales.

En ese orden, se procederá a definir la situación jurídica de *SILFREDO MORALES ALTAMAR* con miras a determinar si de la prueba legalmente allegada al proceso se puede inferir, razonablemente, su compromiso penal en los hechos investigados y consecuentemente si procede imponerle medida de aseguramiento no privativa de la libertad.” (CORTE SUPREMA DE JUSTICA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de marzo de 2009. Radicación número: 27539.)

### **CAPITULO III: DIFICULTADES EN LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS.**

Se parte de la hipótesis que la Fiscalía General de la Nación solicita al Juez de Control de Garantías únicamente la medida de aseguramiento privativa de la libertad, sin que sean de aplicación las otras medidas, incluso, como se pudo dejar establecido en el presente trabajo, la jurisprudencia a desarrollado *in extensu*, únicamente lo referido a la privación de la libertad.

Y es que debería partirse de la base de que la pena privativa constituye, por excelencia, el escenario de tensión entre la efectividad del proceso penal y la libertad individual. De ahí, la importancia del reconocimiento y respeto de la detención preventiva como medio para cumplir determinados fines estrictamente procesales, ya que, en palabras de la Corte, la naturaleza cautelar de la detención preventiva está relacionada con su carácter meramente instrumental, que impone su ineludible fundamentación, en cada caso concreto, en alguna de las finalidades mediante las cuales se provee a su justificación.

Cabe resaltar que en Colombia, se hace un uso indebido de este instrumento, transformándolo con cierta frecuencia, en una forma de pena anticipada, abiertamente contraria a los fines de la Carta.

Si doctrinalmente convergen posturas a favor y en contra de la detención preventiva y su legitimidad al encontrarse en aparente colisión con la presunción de inocencia –y no de culpabilidad- que debe acompañar todo proceso penal, en la práctica, se desfigura esta institución al emplearse preponderantemente, aun cuando los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen claramente que la libertad es la regla, su limitación, la excepción.

## 9. CONCLUSIONES

Al efecto, la vinculación a fines de la detención preventiva, es decir, el criterio de necesidad, encuentra fundamento en el artículo 9° del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, que establece, inter alia, que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. En igual sentido, su viabilidad como medida procesal encuentra fundamento en el artículo 6.1 de las Reglas de Tokio (Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad) afirmando que ésta privación es el último recurso; así como el artículo 58 de las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos que pregona como factible la medida en aras de proteger a la sociedad.

El operador judicial también deberá tener en cuenta la garantía que representa para el procesado, el principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento, ya que en él, se consagran variadas posibilidades para asegurar los fines propios del proceso, como la restricción de la libertad en la residencia en lugar de una en establecimiento carcelario, así como las demás que no son restrictivas de este derecho fundamental; que deberán estar orientadas de acuerdo a su necesidad, adecuación y proporcionalidad, resultando idóneas y ajustadas al caso concreto, garantizando la indemnidad del proceso a través de



la conservación de los medios de prueba. La restricción de la libertad no puede operar automáticamente.

Finalmente, la aplicación de una medida restrictiva de la libertad debe partir de dos presupuestos básicos y simultáneos, como lo sostiene el Juez Henry Leonardo Murillo, a saber: (i) el *fumus comisi delicti*, de acuerdo a la materialidad del delito y la probabilidad o sospecha fundada, y (ii) el *periculum libertatis*, determinado por el ineludible fin de salvaguardar los medios de prueba para el debido desarrollo del proceso.

## 10. BIBLIOGRAFÍA

Bobadilla Moreno, Jesus Angel (2006). *Privación de la libertad en el sistema penal acusatorio: Character excepcional*”. Revista Juridica Pielagus, pp.79-90.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-293 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-318 de 2008.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-456 de 2006. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-327 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz

CORTE SUPREMA DE JUSTICA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de marzo de 2009. Radicación número: 27539.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, radicado 24152 del 20 de octubre de 2005; Únicas instancias: rad. 9842, auto del 19 de enero de 2006; rad. 19528, auto del 20 de junio de 2007; rad. 22019, auto del 12 de marzo de 2008; rad. 26708, auto del 9 de junio de 2008, entre otros.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal Auto de 20 junio de 2007

Radicado 19528

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal Auto del 20 de octubre de

2005. Radicado 24152

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 9 de febrero

de 2006, radicados 23700. En el mismo sentido radicados 25300 del 23 de mayo de 2006 y 26831 del 15 de mayo de 2008.

Tinés Palacio. Juan. (2011). “*Principio De Inocencia Y Medida De Aseguramiento Privativa De La Libertad En Colombia*”. Revista Universitaria de la Universidad Autónoma. No. 20. Bogotá. p. 22. Recuperado de <http://www.unaula.edu.co/sites/default/files/PRESUNCIÓN%20DE%20INOCENCIA.pdf>

Vanegas Villa, Piedad Lucía. (2007). *Las audiencias preliminares en el Sistema Penal Acusatorio*. Fiscalía General de la Nación. Bogotá. p. 69

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2680/22.pdf>